

¿“Socialismo del siglo XXI” o viejo centrismo estatal? Una lectura disidente de las transformaciones en Venezuela*

RAÚL ZELIK**

Resumen

Las transformaciones políticas en Venezuela polarizan los debates, no sólo en Colombia. Lo que para unos es una dictadura comunista, para otros representa una esperanza de democratización y justicia social. En realidad, un análisis serio de la ‘Revolución Bolivariana’ muestra un panorama mucho más complejo y contradictorio. Por un lado, hay importantes avances en la política social: con la recuperación de los ingresos petroleros — que antes no salieron de la empresa estatal PDVSA — el Gobierno venezolano ha logrado disminuir la desigualdad social. Numerosas misiones en las áreas de salud, educación y vivienda han mejorado notablemente las condiciones de vida de los más pobres. Paralelamente, la nueva Constitución ha abierto espacios de participación ciudadana, permitiendo la inclusión política de grupos tradicionalmente marginados.

* Artículo recibido el 5 de noviembre de 2010 y aprobado el 10 de diciembre.

** Dr. Raúl Zelik, Doctor en Ciencia Política, integrante del grupo de investigación: Política y derechos fundamentales, clasificado a Colciencias, politólogo y escritor. Docente de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Por otro lado, sin embargo, hay un liderazgo cada vez más personalizado del presidente Chávez y el país apenas ha avanzado en la transformación de su modelo económico rentista. A pesar de una retórica alternativa e importantes esfuerzos en políticas de desarrollo, Venezuela sigue dependiendo completamente de las exportaciones petroleras y de las importaciones agrarias.

El autor sostiene que Venezuela necesita superar este *impasse* si realmente quiere convertirse en una alternativa para América Latina. Para ello, no obstante, sería necesaria la apertura de un debate abierto y autocrítico en el país.

Palabras clave: Venezuela, Revolución Bolivariana, misiones, estado rentista, desarrollo alternativo.

Abstract

The political changes in Venezuela polarized debates, not only in Colombia. What for some is a communist dictatorship, for others it represents a hope for democratization and social justice. In fact, a serious analysis of the “Bolivarian Revolution” shows a much more complex and contradictory. On the one hand, there are important advances in social policy: the recovery of oil revenues that had not left the state company PDVSA. The Venezuelan government has reduced social inequality. Numerous missions in the areas of health, education and housing have significantly improved living conditions for the poorest. In parallel, the new Constitution has opened spaces for citizen participation, allowing the political inclusion of traditionally marginalized groups.

keywords: political changes, democratization, social justice, Bolivarian Revolution, Constitution.

Cuando se trata de la política social y de desarrollo del gobierno de Chávez la crítica presenta repetidamente dos argumentos: el primero reza que no es ninguna obra de arte realizar programas sociales dados los altos ingresos provenientes del petróleo; el segundo, relacionado con el

anterior, que la centralidad estatal de la actual política gubernamental no hace más que agudizar los viejos problemas estructurales de la sociedad venezolana. A ello se añade que un desarrollo autónomo de Venezuela con perspectivas de futuro ha sido impedido en los decenios pasados, sobre todo por el hecho de que prácticamente todos los sectores económicos dependían del sistema de subvenciones, lo que impedía desarrollar una base productiva autónoma.

El primer argumento — que juega un papel central en los medios *mainstream* — no es muy convincente, en vista de los acontecimientos reales desde 1998. Se silencia por completo que el gobierno de Chávez por nada tuvo que luchar tan duro como por los ingresos provenientes del sector petrolero. El hecho de que el precio del petróleo volviera a subir en 1999, tras un período de varios años de precios bajos, se debió en buena medida a los esfuerzos del entonces flamante gobierno de Chávez. La iniciativa venezolana permitió que la OPEP volviera a funcionar, restableciéndose la disciplina de las cuotas de extracción. Esta política exterior, sorpresivamente consciente de sí misma, deparó al gobierno de Chávez precozmente la hostilidad de los Estados Unidos de América (EUA) y de diversos gobiernos europeos.

Y también la capacidad de financiar programas sociales con los crecientes ingresos petroleros (en un principio modestos) tuvo que ser conquistada a duras penas por el gobierno venezolano. La movilización de la oposición burguesa — que entre 2002 y 2004 organizó dos intentos para derrocar a Chávez y un referéndum derogatorio —, no se inició por tanto con las reformas políticas en el marco de la nueva Constitución de 1999, sino a finales de 2001, cuando el gobierno — hasta entonces sin un claro perfil políticosocial — procedió a la ejecución de las medidas distributivas. El conflicto escaló cuando en este contexto el gobierno trató de colocar personal propio en la empresa petrolera estatal PDVSA. Mommer (2003) ha mostrado cómo la gerencia se había esforzado hasta entonces por apartar sistemáticamente a esta empresa estatal del control del Gobierno, y de ocultar al Estado las ganancias (entre otros métodos, a través de negocios con sucursales extranjeras de PDVSA). En conjunto, se ha de partir de que la gerencia, según Mommer, se había propuesto una reprivatización de la empresa.

El que PDVSA entregue hoy nuevamente una gran parte de sus ganancias al Estado, y que de esta manera se haya generado un margen político-fiscal para programas sociales, no se puede explicar simplemente con la vertiginosa subida del precio del petróleo desde 2002. Sin la disposición del Gobierno a enfrentarse a poderosos intereses minoritarios no serían financiables sus programas sociales.

De ahí que, en su contenido, me parezca más interesante el segundo argumento que considera la actual política social como un retorno del específicamente venezolano *populist system of conciliation* (Rey, 1991). De hecho, subvenciones para alimentos, programas de vivienda, salud y educación, financiados con medios públicos, fueron siempre en el pasado (pero sobre todo durante la *bonanza petrolera* bajo el presidente Carlos Andrés Pérez) un firme componente integral de la política gubernamental. Tal sistema de altos gastos públicos conducía ciertamente a una reducción de la pobreza absoluta (Cfr. Buxton, 2003), pero al mismo tiempo servía de mecanismo para el enriquecimiento elitario. En una entrevista con el autor (Zelik, 2003), el antiguo Viceministro de Planificación, Roland Denis, calificó este fenómeno como ‘modelo venezolano de acumulación’. Como quiera que la economía descansaba sobre la renta petrolera (administrada por el Estado), la acumulación privada-capitalista tenía lugar, consecuentemente, también dentro del Estado. El populismo era el tejado a cuyo cobijo se desarrollaba la apropiación de riqueza pública. Los proyectos de infraestructura y construcciones eran calculados muy por encima de los costes reales, y así es como los fondos públicos otorgados desaparecían en bolsillos privados. Tan sólo el presidente socialdemócrata (más tarde incluso vicepresidente de la Internacional Socialista) Carlos Andrés Pérez, parece haberse adjudicado de esta guisa miles de millones a su cuenta particular.

El *puntofijismo* trajo por tanto un estatalismo dominado por la corrupción y el clientelismo, con lo que se fue erosionando ya en sus primeros años la legitimidad de la ‘democracia modelo de Venezuela’ —como erróneamente se la llamaba con frecuencia—. Pero en tanto que una parte de la riqueza petrolera llegaba a los segmentos bajos de la sociedad, este sistema se mantenía más o menos estable. Este orden se derrumbó, sin embargo, en 1983, cuando Venezuela cayó en la trampa de la deuda y se

inició el círculo de la devaluación monetaria. Las élites cargaron la crisis sobre las clases populares, y el *Caracazo*, la totalmente sorpresiva revuelta de los pobres y su brutal represión por parte del Gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, puso de manifiesto la ruptura. En el vacío político generado por esta crisis de representatividad es cuando se produce en la década de 1990 el vertiginoso ascenso de Chávez, quien logra reunir en torno suyo una amplia alianza de opositores al sistema.

Críticos de la política social chavista aducen ahora que la política social gubernamental es en muchos aspectos asombrosamente parecida al clientelismo populista de Carlos Andrés Pérez. Según ellos, la subvención de ramos completos de la economía infla nuevamente al Estado y refuerza existentes estructuras de corrupción y clientelismo; y, además, el Gobierno nada hace por enfrentarse a los peligros del alto precio del petróleo. De hecho, Venezuela sufrió repetidamente en los decenios pasados bajo la “enfermedad holandesa”, es decir, bajo una sobrevaloración crónica del bolívar como consecuencia de las altas exportaciones de petróleo. Los flujos de dólares hacían subir el valor del bolívar, lo cual encarecía relativamente los productos fabricados en el país. Así es como resultaba más barato importar mercancías que producirlas en Venezuela. En esta situación apenas sí podían desarrollarse los sectores productivos.¹

Para ser justos hay que señalar sin embargo que el Gobierno de Chávez sí conoce esta relación entre riqueza de recursos, inflación del Estado y bloqueo del desarrollo. Ya en 1999, cuando en Venezuela para nada se

¹ En la agricultura, esta deformación –subdesarrollo producto de riqueza– condujo a fenómenos particularmente absurdos: En 2000, Venezuela importaba (y sigue importando hoy) un 60% de sus alimentos. La agricultura existente está marcada por una ganadería extensiva lo que también tiene consecuencias políticas: para los propietarios de las fincas ganaderas, la propiedad del suelo es en primera línea una forma de inversión especulativa. La aniquilación de la producción nacional (como consecuencia de los altos ingresos petroleros) corre por tanto paralela con un fortalecimiento de una oligarquía rural políticamente reaccionaria. Precisamente este grupo es el que en los últimos nueve años se ha opuesto a reformas con particular vehemencia. Parece absurdo pero la mayor parte de los asesinatos políticos cometidos en los primeros 7 años del Gobierno de Chávez se ha producido en relación con conflictos de tierras; la gran mayoría de las víctimas procedía de las filas del movimiento campesino, asesinadas por sicarios a sueldo de grandes terratenientes venezolanos.

hablaba de socialismo, Chávez se refería a la necesidad de una política de desarrollo sostenible. Su punto de gravitación lo veía este presidente oriundo de campesinos en la agricultura. Los ingresos estatales ya no deberían más seguir siendo simplemente consumidos, sino colocados para que produjeran. Así fue como el Gobierno puso a disposición medios para el sistema de salud pública rural y para la reanimación de la producción agraria. Especial interés recayó aquí sobre los *Llanos*, las tierras bajas del sur venezolano con escasa densidad de población.

Pero a mayor escala es sólo a partir de 2004 cuando se empieza a debatir sobre una política alternativa de desarrollo, lo que obedece sin duda a dos razones principales: por un lado, el Estado venezolano superó en este período una crisis fiscal que durante los conflictos políticos internos de 2002/3 casi había llevado a un colapso.² Gracias a una exitosa consolidación de PDVSA y del creciente precio del petróleo, el Estado venezolano disponía a partir de 2004 de medios considerables. Por otro, se radicalizó el proceso político. Los intentos de la oposición por derrocar al presidente, de abril y diciembre de 2002, habían mostrado claramente que los partidos gubernamentales no eran el principal apoyo de Chávez, sino una movilización descentralizada,³ sostenida por redes de las bases. Fueron estas redes las que se enfrentaron en abril de 2002 al Gobierno golpista y las que aseguraron la distribución de bienes de consumo durante el paro empresarial en diciembre de ese mismo año.⁴

² En 2003, los empleados públicos tuvieron que esperar en parte casi medio año a que les pagaran su sueldo.

³ Calificar a esta movilización de “espontánea” pasa por alto el hecho mismo, ya que los barrios pobres de Caracas disponen perfectamente de formas propias de organización que han ido creciendo con el tiempo. Para evitar conocidas e infructuosas discusiones en torno a las relaciones entre espontaneidad, organización e institución, he propuesto por ello (Zelik, 2006) discutir el proceso venezolano con base en el concepto del *rhizome*, desarrollado por Deleuze/Guattari —es decir, partir de conexiones autoorganizadas, múltiples, que se vinculan de manera no concéntrica ni obligatoriamente jerárquica.

⁴ En ambos casos el ejército también jugó un papel clave. Pero en última instancia fue la movilización antigolpista la que generó entre las filas de los militares un cambio repentino de opinión.

Las *misiones*: política social y conflicto político interno

Tras estos sucesos, el Gobierno de Chávez empezó a orientar su política más intensamente hacia la base social. Para los electores, provenientes en su mayoría de los barrios pobres, la principal deficiencia de la política gubernamental consistía concretamente – muy al contrario de lo que era para la oposición burguesa – en que hasta entonces nada había cambiado en las condiciones de distribución.⁵

El que el Gobierno de Chávez pusiera en ejecución a partir de 2003 proyectos alternativos sociales y de desarrollo respondía por tanto perfectamente a las ideas de transformación de sus electores. La objeción que se escucha frecuentemente de que estas medidas no obedecían a una estrategia desarrollada y sostenible es sin duda correcta. Aunque tampoco se ha de olvidar que la nueva política social era menos el resultado de un proyecto gubernamental que una parte de esta dinámica de conflicto.

La historia de las *misiones*, de los programas sociales estatales, confirma claramente este carácter. Entre los primeros programas se contaban las misiones *Barrio Adentro*, *Ribas*, *Robinson* y *Mercal* (*cfr.* una visión de conjunto en Wilpert, 2007). Aquí se trataba por un lado de satisfacer necesidades elementales (asistencia básica sanitaria; alfabetización; acceso al sistema educativo; abastecimiento de productos de consumo diario). La base social que mantenía en su cargo al Presidente desde 1998 se beneficiaba por primera vez directamente de la política gubernamental. Quien describa este hecho negativamente como mero abastecimiento de una clientela, está ignorando el profundo significado de los programas. Gracias a *Barrio Adentro* fueron atendidas por primera vez básicosanitamente en Venezuela millones de personas de bajos ingresos; las misiones *Ribas* y *Sucre* posibilitaron a cientos de miles la asistencia a la escuela superior y la entrada a la universidad. Una política que se vuelca de esta manera hacia los grupos de población marginalizados, políticamente pri-

⁵ En este sentido es correcto hablar de tres actores. Mientras que la oposición trataba de impedir una redistribución de ingresos y posesiones, la base social del chavismo exigía exactamente esa transformación. En muchos conflictos, por ejemplo en los del campo en el sur y oeste venezolanos, el Gobierno se encontraba largo tiempo entre estas posiciones.

vados de sus derechos, no puede ser descalificada sin más como manobra táctica electoral.

Un segundo aspecto de las misiones, no menos interesante que el anterior, consiste en la movilización social que por lo menos al comienzo las acompañaba. Hasta fines de 2003 el Gobierno de Chávez se hallaba en la peculiar situación de que pese a formar el Gobierno no controlaba el aparato del Estado ni estaba ‘en el poder’ —una situación ya discutida instructivamente por Rossanda (1975) con base en el ejemplo de Chile bajo Salvador Allende. Pero esta situación de crisis llevó en el caso venezolano a una provisionalidad notable: el Gobierno de Chávez se vio obligado en 2003 a gobernar al margen de su aparato administrativo — o, como también se decía, a poner un *bypass*. En este sentido, las misiones eran medidas gubernamentales improvisadas en el conflicto con la oposición. Con base en el ejemplo de las tiendas Mercal, administradas por el Estado, se puede analizar bien este hecho — incluidas también sus contradicciones —.

A la creación de estas tiendas precede la crisis de finales de 2002. La huelga general, apoyada fundamentalmente por empresarios y por la clase media,⁶ condujo entonces a un colapso del suministro de bienes de consumo diario, que ya no podían ser despachados por el comercio al por mayor. En Caracas surgió en esta situación una especie de economía de emergencia: el Gobierno compraba alimentos, gas de cocina y gasolina en el extranjero, los militares transportaban los bienes a los barrios pobres y la distribución era organizada por organizaciones de las *parroquias* como se llaman en Venezuela. De esta manera recibieron las redes de base un reconocimiento político que hasta entonces les había sido negado. Con la creación de las tiendas Mercal se quería institucionalizar esta experiencia. Las tiendas habrían de garantizar un abastecimiento independiente de grandes empresas y posibilitar al mismo tiempo una política diseñada de compra (el objetivo era priorizar alimentos producidos por cooperativas o procedentes de países latinoamericanos). Pero esta orientación

⁶ Sólo en el sector petrolero — por lo demás central — fue secundada la huelga general de seis semanas por una mayoría de los empleados. En los otros sectores fueron los empresarios mismos quienes cerraron sus negocios y paralizaron las plantas de producción.

estratégica apenas sí se plasmó en la práctica: aunque es cierto que algunas redes comunitarias han participado en la construcción de las tiendas estatales Mercal, ya que muchos activistas de base encontraron empleo allí, no se ha dado la contraloría social necesaria que impidiera la conformación de nuevas estructuras corruptas e ineficaces.⁷

La experiencia del sistema alimentario en torno de los Mercal y, a partir de 2008, del plan Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) es ilustrativa en este sentido: la red estatal, financiada por PDVSA, fue víctima de enormes escándalos de corrupción en 2010. Los ejecutivos de PDVAL habían acaparado unos 1.300 contenedores de alimentos en un almacén en el Estado de Carabobo; otros 800 contenedores fueron encontrados en el estado vecino de Cojedes. Parece que los ejecutivos alrededor del ex-director de PDVAL Luis Pulido habían especulado con los alimentos –lo que llevó a su detención en 2010 (*El Universal*, 1.6.2010; *Venezuelanalysis Online* 2.6.2010). Pero también es posible que simplemente se trató de una enorme indiferencia, nada inusual en las burocracias estatales venezolanas, tanto de la IV como como de la V República.

Sin embargo, es de destacar que la vinculación de redes comunitarias existentes y el estímulo de la autoorganización social jugó un papel importante en las primeras misiones. Los programas *Robinson*, *Ribas* y *Barrio Adentro*, por ejemplo, fueron iniciados a partir de 2003 debido a que el personal profesional apenas estaba dispuesto a trabajar en los barrios pobres que están considerados como sospechosos por las clases medias venezolanas. En el caso de los programas educativos *Robinson* y *Ribas*, por este motivo, se recurrió a una solución provisoria. Las organizaciones de los distritos habían de poner a disposición aulas y *facilitadores*, mientras que el Estado se encargaba de proveer de libros, televisores y videos di-

⁷ En el barrio La Vega, empleados de Mercal informaron sobre desfalcos masivos en la empresa. En general llama la atención que numerosos productos sigan siendo importados de los EUA –el que la política de subvenciones del Estado venezolano venga a beneficiar, a fin de cuentas, a empresas transnacionales. Como aspecto positivo hay que mencionar, sin embargo, el hecho de que las tiendas Mercal abastecen de alimentos de manera segura, también en barrios bajos lejanos, los comedores populares (creados en el marco de programas de salud).

dáticos. Es evidente que la falta de profesores especializados repercutió negativamente sobre las sostenibilidad de estos programas. Pero, por otro lado, no se puede negar que ambas misiones despertaron un verdadero entusiasmo educativo entre la población pobre, lo que significa realmente un éxito nada despreciable: en un grupo de población hasta entonces espacial, política y socialmente marginado, se impuso la convicción de que la marginación social no es algo dado por naturaleza. Incluso cuando numerosos participantes de la misión *Ribas* abandonaron sus cursos antes de alcanzar la madurez escolar –en algunos barrios se criticó con frecuencia la falta de disciplina de facilitadores y alumnos–, no se ha de minusvalorar el número de aquellos a quienes gracias a estos programas se abrieron nuevas perspectivas.

Similar es el caso de la misión de salud *Barrio Adentro*. El discutido recurso a médicos cubanos también tuvo en este caso que ver con el hecho de que el personal venezolano especializado –reclutado por regla general entre la clase media– no estaba dispuesto a prestar sus servicios en barrios pobres o pueblos alejados. Dentro de este contexto el Gobierno de Chávez firmó el conocido acuerdo con el Gobierno cubano. El Colegio Médico Venezolano criticó la entrada de 10.000 médicos cubanos, calificándola no sin razón de *dumping* salarial. Pero también este programa estuvo caracterizado por una notoria participación ciudadana. Al menos en la fase inicial de *Barrio Adentro* se exigió de los vecindarios conformar comités de salud que apoyaran a los médicos cubanos en su trabajo diario. De esta manera, tan sólo en Caracas se comprometieron miles de voluntarios en el marco de *Barrio Adentro*.

Estas formas improvisadas de estatismo alternativo han vuelto a perder importancia desde 2005, cuando el Gobierno volvió a consolidarse tras los intentos de golpe y derrocamiento. El Gobierno consideró manifiestamente como insuficientes las estructuras surgidas durante la crisis política y abogó por una institucionalización de los programas. Los nuevos aparatos administrativos en vías de surgimiento, no obstante, ya han empezado a mostrar que no son más transparentes y fiables que las desacreditadas estructuras del *puntofijismo*.

‘Desarrollo endógeno’, ‘Socialismo del siglo XXI’ y estatalismo alternativo

Con los conceptos de ‘desarrollo endógeno’ y ‘Socialismo del siglo XXI’, el presidente Chávez definió en 2004 y 2005 unos puntos básicos de un proyecto de desarrollo alternativo a gran escala. Ambos conceptos fueron esbozados sólo en sus líneas generales: bajo ‘desarrollo endógeno’ se entiende en Venezuela una política de desarrollo descentralizado y sostenible que trata de utilizar las capacidades y estructuras locales como potencial. A diferencia de las estrategias de sustitución de importaciones (orientadas a la gran industria), que fueron dominantes en América Latina en las décadas de 1950 y 1960, hoy se persigue un desarrollo a menor escala que integra y promueve ciclos locales de autoabastecimiento en regiones rurales, así como también en el sector informal.

El ‘Socialismo del siglo XXI’ tiende en una dirección similar. Se entiende bajo este concepto una renuncia a las tradiciones autoritario-centralistas del socialismo estatal de antaño. En las publicaciones venezolanas oficiales se pueden identificar las siguientes características de tal socialismo: a) establecimiento de una economía social, no totalmente nacionalizada, en la que se garantiza públicamente la manutención básica y se promueven formas de propiedad y producción solidarias, cooperativistas y colectivas; b) mantenimiento y profundización de la democracia a base de plebiscitos, referendos, presupuestos participativos, etcétera; c) una adaptación conceptual del concepto de socialismo a la realidad latinoamericana, en el que se recojan tanto tradiciones indígenas colectivas como principios cristianos y concepciones de justicia de las guerras de independencia y d) la búsqueda de un proyecto de integración continental propagado por Chávez bajo la denominación Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA.

Puede que este proyecto de desarrollo tenga un diseño tosco, pero las reflexiones que lo respaldan nada tienen de evidente ni de banal. Así, la propagación de un modelo de desarrollo descentralizado, menos orientado a la gran industria, está basada en la experiencia de que la modernización tardía está condenada económicamente al fracaso y/o promueve la

formación de sistemas represivos.⁸ También el fortalecimiento de formas de propiedad solidarias, el fomento de una democracia participativa y la consideración de tradiciones latinoamericanas, son elementos plausibles de un programa alternativo.

El problema fundamental del proyecto chavista radica, sin embargo, en el hecho de que entre las metas generales y la praxis política diaria se abre una brecha gigantesca. Y mi objeción no apunta a que el Gobierno de Chávez haya de aportar por arte de magia soluciones a problemas fundamentales; más bien hay que constatar críticamente que el Gobierno se esfuerza poco por hacer transparente y discutir la complejidad del proyecto de transformación.

Edgardo Lander, crítico del Gobierno venezolano, ha llamado varias veces la atención sobre este aspecto: se propaga el socialismo del siglo XXI sin analizar a la vez por qué motivos el anterior “socialismo realmente existente” se desarrolló hacia un sistema autoritario, totalmente ineficiente en sentido económico. El discurso de Chávez se caracteriza por una ausencia completa de reflexiones críticas al respecto. El mantenimiento de una economía mixta, la preservación de diferentes formas de propiedad, garantías democráticas y el desarrollo de proyectos específicamente nacionales o regionales, es todo lo contrario de una novedad en el debate socialista. En la antigua Yugoslavia se trató de construir a partir de la década de 1960 un socialismo cooperativista; en el Perú, el Gobierno del militar Juan Velasco Alvarado entregó entre 1968 y 1975 sectores básicos de la industria a los obreros, se remitió a tradiciones indígenas y fortaleció asambleas comunales, o sea, a ese mismo *poder popular* del que hoy se vuelve a hablar en Venezuela; participación democrática, identidad latinoamericana, libertad de opinión y economía mixta fueron elementos básicos de la política o por lo menos de la retórica sandinista en Nicaragua. Estos enfoques tienen en común —lo mismo que el socialismo esta-

⁸ En la Unión Soviética el salto al desarrollo industrial entre 1930 y 1960 corrió paralelo a un autoritarismo y centralismo brutales. Es curioso que en los exitosos Estados capitalistas del sureste asiático el desarrollo discurre en muchos aspectos de manera similar. Corea del Sur, por ejemplo, logró incorporarse a la economía global entre 1960 y 1990 bajo una así llamada *dictadura desarrollista*.

tal de cuño soviético — que todos ellos han fracasado. Lo cual no quiere decir necesariamente que, en principio, tal política haya de ser errónea. Aunque sí habría que dar una respuesta a por qué estos enfoques tampoco se desarrollaron del modo deseado.

Y es precisamente este debate — decisivo — el que evade el Gobierno en Venezuela. Pero no sólo eso: en manifiesta contradicción con su propio discurso, el Gobierno de Chávez defiende a Cuba como modelo social. Aquí, hasta el observador mejor intencionado, que reconoce los logros cubanos en la manutención de servicios básicos, tiene que constatar la ineficacia e incrustación de la economía y la ausencia de una participación y democracia real en la sociedad cubana.

La actitud chavista frente a Cuba es perfectamente característica del proyecto del Gobierno venezolano. Los plausibles principios son contrarrestados regularmente por la praxis política. Se habla, por ejemplo, de desarrollo alternativo, ambientalmente adecuado, pero se siguen otorgando derechos de explotación minera en regiones indígenas a empresas transnacionales. Se formula una crítica conceptualmente correcta al Estado pero al mismo tiempo se crean instituciones que son alarmantemente similares a las viejas: no transparentes, ineficientes y democráticamente incontrolables, sirven a los nuevos funcionarios para su enriquecimiento personal.⁹ Por cierto, no debe sorprender que las nuevas se parezcan a las viejas instituciones. El carácter clientelista del Estado venezolano no se explica en primera línea por la inmoralidad del personal corrompible: su problema ha sido siempre, y sigue siéndolo, de carácter estructural. El hecho de que la renta petrolera sea distribuida dentro del Estado, lo conforma de manera clientelista. El enriquecimiento personal sólo se podría frenar si se produjera una democratización radical, vale decir, si se cuidara de la transparencia del aparato y de una participación ciudadana activa. Cierto, se habla en Venezuela de una tal *contraloría social* — ella es incluso uno de los pilares de la reforma administrativa —, pero en la práctica el

⁹ Sobre las proporciones reales de la corrupción no disponemos de datos seguros. También hay que reconocer que las quejas de la corrupción se cuentan entre las ocupaciones preferidas de los venezolanos. Sin embargo, no hay duda de que el control ciudadano previsto por la ley (Contraloría Social) apenas ha mostrado efectos hasta hoy.

aparato estatal se muestra resistente al control. Y no en último término, debido a que el aparato político está dominado por estructuras de liderazgo y redes de poder informales, cuyo surgimiento promueve el estilo personal del presidente. Chávez juega un papel contradictorio: de un lado le corresponde sin lugar a dudas el mérito de haber iniciado un movimiento participativo y, de otro, en cuanto figura política realzada y líder incuestionable, significa un obstáculo para una democratización verdadera.

‘Núcleos de desarrollo’, cooperativas, autogestión obrera

Consideremos ahora más en detalle algunos proyectos de la política económica y de desarrollo:

En 2004/5 el Gobierno empezó a inaugurar los llamados *núcleos de desarrollo endógeno*, una especie de plantas modelo de política de desarrollo. La más conocida de estas plantas se halla en Catia, un barrio popular en el oeste de la capital, Caracas. En unas instalaciones retiradas del servicio, propiedad de la empresa estatal PDVSA, se ensaya en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda hacer visible la vinculación entre política económica, política social y política de desarrollo: las instalaciones de abastecimiento y de producción se hallan directamente unas al lado de otras; aparte de una clínica, instalaciones de deporte y algunas organizaciones de vecinos, hay una fábrica de zapatos, una sastrería y una huerta de verduras llevada por una cooperativa. Las instalaciones para la salud, entre las que se encuentra también una farmacia que ofrece medicinas a precios muy bajos, son mantenidas por el Estado y su utilización es gratis. También las inversiones en las instalaciones de producción fueron financiadas con fondos públicos. Esta planta deja bien claro que lo importante para el Gobierno venezolano no es en primera línea un incremento de una producción orientada al mercado mundial. Por desarrollo entiende más bien un proceso socioeconómico general que ha de repercutir en beneficio de la mayoría de la población.

Simultáneamente, se ha tenido en cuenta el aspecto de la producción en la planta. Las cooperativas en la industria textil y del calzado fueron fundadas en el marco de la misión *Vuelvan Caras*, un programa de educación que hace posible la formación profesional a los adultos. Los cooperati-

vistas fueron formados en 2005 en la fábrica textil y de calzado para que ellos mismos pudieran dirigir la planta autónomamente. Las inversiones efectuadas por el Estado han de ser saldadas más tarde, al menos en la perspectiva, por las cooperativas.

A todas luces se quiso evitar establecer nuevamente relaciones paternalistas entre el Estado (o sus élites) y los ciudadanos, tales como eran características del populismo de Carlos Andrés Pérez. Los fondos públicos no han de ser simplemente consumidos, sino se invierten en la formación profesional y en instalaciones productivas. Los cooperativistas no son alimentados, al menos teóricamente, por el Estado; éstos tienen que amortizar sus plantas y de este modo poner fondos a disposición de otros proyectos promocionales. Democracia y participación son entendidas como desafíos que se plantean también en la vida económica; con ello se amplía claramente el significado del concepto de democracia. Además se intenta – en consonancia con el principio ‘endógeno’ – aprovechar también los conocimientos locales: Catia está considerado como un barrio en el que existen tradicionalmente muchas fábricas textiles y de calzado.

El problema central del proyecto sigue siendo sin embargo indiscutible: apenas sí existe un ramo donde la competencia del mercado mundial sea tan brutal como en el textil y en el del calzado. Si las cooperativas no han de competir con los *sweat shops* del sureste asiático en lo que respecta a peores condiciones laborales, se verán permanentemente necesitados del apoyo estatal. Pero de este modo, el viejo principio paternalista, que desde siempre estuvo en el fondo del populismo clientelista venezolano, vuelve a revivir un silencioso renacimiento. El Estado – o para decirlo más drásticamente: el presidente Chávez – seguirá cuidando de las cooperativas. Aquí poco se puede decir en contra de que la producción local sea protegida frente a una competencia que opera con salarios bajos. Pero cuanto más directa sea esta protección en forma de subvenciones, tanto más marcadas serán las expectativas de alimentación que son tan características de Venezuela: el Estado como proveedor de ciudadanos (tendencialmente pasivos).

Proyectos de mayores dimensiones en el sector automovilístico y tecnológico también se ven confrontados con este fenómeno: el *joint venture* iraní-venezolano *Venirauto* ha puesto en el mercado los primeros autos

de clase media, de producción nacional y ahorrativos de combustible. Una cooperación chino-venezolana produce desde hace poco ordenadores a precio barato para el mercado nacional. Ambos proyectos se verán a mediano plazo ante la alternativa de adaptarse a las condiciones internacionales de producción o a tener que ser subvencionados por el Estado.

Por qué esta vinculación con el Estado es un problema –al menos con frecuencia– queda claro en el caso de las cooperativas agrarias. Fox (2007) informa en *venezuelanalysis.com*, una revista en línea próxima al Gobierno pero no falta de crítica, acerca de 181.000 cooperativas que en 2007 estaban registradas en Venezuela. De todas ellas funcionan, incluso a tenor de estadísticas oficiales, menos del 40%. Ello tiene que ver, entre otras causas, con el hecho de que el auge cooperativista fue un resultado de la movilización política de Chávez. El presidente logró ciertamente desatar un movimiento social que trató de cambiar en sus fundamentos las relaciones económicas, pero el impulso fue tan cortoplacista que apenas se pudieron consolidar proyectos sustentables. En una cooperativa agraria en Barinas, al sur de Venezuela, pequeños campesinos hablaban de que en 2005 sólo habían quedado diez familias de las 100 que originariamente la formaban. Y ello pese a que el Gobierno había cumplido muchas de sus promesas y puesto a disposición de la alejada cooperativa algo de infraestructura –comunicación vial, casas, escuelas, etcétera–. La situación geográfica y los conflictos internos llevaron sin embargo a muchos miembros fundadores a renunciar al proyecto en unos pocos meses. A ello se añadía la dificultad de que muchos cooperativistas no tenían mucha o ninguna experiencia en el campo de la agricultura. Con el programa de formación profesional *Vuelvan Caras* y con asesoría técnica se trata de llenar estos vacíos, pero los resultados son hasta ahora bastante frustrantes.

Desde el Ministerio de Agricultura se informa además de otros obstáculos. Como las cooperativas son promovidas con fondos públicos, se producen repetidamente fundaciones de cooperativas motivadas por razones meramente financieras. En un caso, incluso un terrateniente animó a sus peones a fundar una cooperativa para así poder ellos solicitar maquinaria agrícola. El tractor concedido a esta cooperativa y financiado con fondos públicos fue finalmente cedido al terrateniente, previo regalo de algunas decenas de cajas de cerveza.

Uno de los problemas fundamentales parecería ser que el crecimiento cualitativo en Venezuela no puede ir al ritmo del cuantitativo. Este problema es todavía más grave a causa de la política de Chávez. Como ya hemos dicho, se caracteriza por una permanente movilización política de las clases populares. Esto es positivo, por una parte: Chávez ha animado a la participación a una población no representada, medialmente invisibilizada y políticamente marginalizada. Por otra parte, no obstante, la comunicación chavista genera una difícil dinámica propia. Chávez tiene que movilizar siempre de nuevo a la población para mantener en marcha el proceso social que le sirve de soporte, lo que quiere decir que está obligado a mostrar éxitos en sus continuas apariciones en los medios de comunicación.

De esta manera se ha ido formando algo que se podría designar como variante específicamente venezolana de la ‘ideología de la tonelada’:¹⁰ el crecimiento cuantitativo exhibible es más valorado que el cualitativo, siempre más difícil de ver. Una víctima de esta política, según comentan organizaciones comunitarias caraqueñas, fue Julio Montes, ex ministro de la vivienda, quien presentó su dimisión en 2005. Montes, a quien se atribuían buenas relaciones con los movimientos cívicos y comunitarios, propuso tras la toma de posesión de su cargo ministerial un cambio radical en la política de vivienda. Congeló contratos no transparentes con empresas privadas y estimuló una estrecha cooperación con los Comités de Tierra Urbana –CTU–, organizaciones populares asamblearias. Urbanistas alternativos hace tiempo remiten a que la participación ciudadana es requisito central para el logro de proyectos infraestructurales. En Venezuela se ha tenido que hacer repetidamente la experiencia de que urbanizaciones construidas por el Estado no fueron aceptadas por los moradores y se desmoronaron sin haber sido utilizadas. Además la participación comunitaria reduce considerablemente el margen de la corrup-

¹⁰ Como ‘ideología de la tonelada’ se designaba en el socialismo de Estado la praxis política de mostrar los éxitos económicos en magnitudes (de peso). Esta manera de proceder aportó estafalarios frutos: para cumplir con el rendimiento previsto (definido en peso) hubo, por ejemplo, fábricas de muebles soviéticas que se dedicaron a fabricar armarios de metal, innecesariamente pesados, para poder así alcanzar la meta prevista con un menor número de piezas.

ción: si los futuros moradores participan en los trabajos de construcción, es más difícil desviar fondos o emplear materiales deficientes.

En este contexto, los CTU aplaudieron las propuestas del ministro Montes para administrar conjuntamente medios financieros públicos en una forma de cogobierno. Pero debido a que el ministro puso en el centro la participación y la transparencia, se construyó perceptiblemente menos de lo originariamente planificado. El presidente Chávez tomó esto como motivo para criticar públicamente a su ministro Julio Montes en su programa *Aló Presidente*. Montes presentó acto seguido su dimisión.

Que aspectos formales y cuantificables se hallan en primer plano, es una impresión que se tiene también en otros campos. La democratización de la vida económica —es decir, la cogestión en grandes fábricas o la autoadministración de fábricas que han dado en quiebra, ocupadas por los obreros— muestra en la práctica efectos sólo limitados. Con frecuencia la cogestión se reduce a una evaluación de nuevos sindicatos chavistas creados dentro de las fábricas, y a una retórica revolucionaria que poco cambia en las condiciones laborales y procesos de decisión. La planta estatal de aluminio de Alcasa, por ejemplo, se halla en régimen de cogestión desde 2005. La producción está sin embargo considerada como tan perjudicial para la salud que en realidad ya debía haber sido cerrada hace tiempo. Incluso en este proyecto de excepción se plantea por tanto la cuestión de qué hay que entender realmente bajo autogestión y democracia. Esto llevó a que en 2008 se reconociera, silenciosamente, que la “cogestión revolucionaria” de Alcasa había fracasado.

Conclusión

Un juicio concluyente sobre la política social y de desarrollo del Gobierno de Chávez no podrá ser por tanto homogéneo. El reproche que le hacen muchos observadores de que el Gobierno reparte los ingresos petroleros sólo por el cálculo político de mantenerse en el poder, es con toda seguridad falso. Si lo importante para el Gobierno de Chávez fuera sólo seguir en el poder, más fácil le sería seguir sirviendo a las élites tradicionales. En política social, el chavismo presenta una alternativa al neoliberalismo. Ya tan sólo esta empresa es digna de ser tenida en cuenta.

También el reproche de que se trata de una política sin perspectiva de desarrollo se apoya en supuestos falsos. El Gobierno venezolano sí ha desarrollado esfuerzos por no consumir simplemente los ingresos, sino por invertirlos en proyectos hacia el futuro, es decir, por incrementar la producción nacional. Programas de formación y de salud de gran volumen, la promoción de la agricultura y la construcción de plantas nacionales de producción, entre ellas, empresas para la fabricación de automóviles y tecnología, manifiestan este deseo de un desarrollo integral. Sin embargo es bastante evidente que los altos ingresos petroleros y las estructuras rentistas del Estado están bloqueando de nuevo cualquier esfuerzo desarrollista, tal como siempre ha ocurrido en el pasado venezolano.

Por último, lo más problemático parece ser que se concede demasiada poca importancia a un crecimiento cualitativo, políticamente enmarcado —y en consecuencia más lento—. Los procesos de democratización, necesarios para un control social del Estado y de la administración, son interrumpidos por el culto a la persona de Chávez. Así ocurre que reformas, en principio correctas, no se plasman en la realidad y quedan como algo completamente formal. Que el gran proyecto alternativo que ha de combinar justicia social, democracia y solidaridad, todavía no se haya materializado en Venezuela, no puede ser una objeción. Una alternativa al mercado y a la competencia tiene que contar con muchas contradicciones internas y, no en último lugar, también con una resistencia masiva externa. Pero sí hay que criticar que en Venezuela apenas se discuta sobre los problemas estructurales internos y sobre las desastrosas experiencias del socialismo real. Los temas a indagar saltan a la vista. Tras las elecciones parlamentarias de septiembre 2010, Edgardo Lander (2010), ha identificado siete problemas centrales, los ha resumido de manera tan lúcida que los quiero reproducir aquí: 1) Modelo de desarrollo: *“¿Es compatible el ‘socialismo ecológico’, del cual hablan los textos de PDVSA, con el objetivo de convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial, definida como una de las siete grandes directrices del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013?”* (ibíd). 2) Soberanía alimentaria: *¿Cómo se puede avanzar hacia ella “si los grandes programas de redistribución de tierra, financiamiento y apoyo a la actividad agrícola están siendo permanente socavados por la importación masiva de alimentos subsidiados, a precios con los cuales no pue-*

de competir la producción interna?” (ibíd). 3) Relación entre organizaciones sociales, Estado y partido: “¿Es posible un proceso permanente de profundización de la democracia sin la construcción de un tejido social autónomo, si las organizaciones sindicales y populares [...] están colonizadas por las estructuras del Estado y del partido? ¿Son los Consejos Comunales el núcleo organizativo democrático del conjunto de la sociedad en la construcción de un nuevo tejido social, de una nueva institucionalidad estatal que reemplace a la existente, o deben ser los Consejos Comunales rojos-rojitos, el lugar donde se organizan los partidarios del chavismo aunque esto signifique excluir a la mitad de la población?” (ibíd). 4) El papel de Chávez: “¿Es el modelo de liderazgo unipersonal y la ausencia de espacios colectivos de debate, de confrontación de ideas y alternativas, compatible con la creación colectiva de una sociedad cada vez más democrática? ¿Qué consecuencias puede tener para la sociedad que se busca construir el que se identifique la lealtad con el ‘dirigente máximo’ como la medida de cuán revolucionario es cada quien?” (ibíd). 5) Pueblos indígenas: “¿Es prioritaria para el gobierno la explotación del carbón en las minas de la Sierra de Perijá sobre los derechos de los pueblos Yukpa y Bari, sobre la preservación de la biodiversidad de la zona (...)? ¿No hay límite para esta lógica extractivista?” (ibíd). 6) Gestión pública: “¿Es posible la transparencia de la gestión pública y la reducción de la corrupción ampliamente extendida si no se reconocen los límites entre lo público/estatal (lo que es de todos) y el ámbito de lo político/partidista?” (ibíd). 7) Inseguridad: “Después de once años de gobierno en los cuales la tasa de homicidios prácticamente se ha multiplicado por tres, convirtiendo a Caracas en una de las ciudades más peligrosas del mundo” no es posible “seguir afirmando que es este un problema heredado de los gobiernos anteriores o que es producto del capitalismo.” (ibíd). 8) Mujeres: “¿Hasta cuándo va seguir siendo el tema del aborto un tema tabú en Venezuela? ¿Cómo es posible que incluso en un país como Colombia, con tan fuerte dominio de gobiernos de derecha, la legislación sobre el aborto sea menos restrictiva que en Venezuela?” (ibíd).

Resumiendo, se puede constatar que los esfuerzos venezolanos de transformación — que plantean cuestiones tan fundamentales como la economía alternativa, la justicia y la democracia social, temas casi olvidados durante el único orden mundial neoliberal — deben ser valorados positivamente. Por lo tanto, es de suma importancia acompañarlos de manera crítica y abierta.

Bibliografía

- Buxton, Julia. (2003). "Economic Policy and the Rise of Hugo Chávez", en: Ellner/Hellinger 2003.
- Castillo, Antonio. (2003). "Breaking Democracy. Venezuela's Media Coup", en: *Media International Australia incorporating Culture and Policy* 108, Sydney / Australia.
- Diehl, Oliver / Muno, Wolfgang [Hg.] (2005). *Venezuela unter Chávez - Aufbruch oder Niedergang?* Frankfurt / Main.
- Eisenbürger, Gert / Küppers, Gaby. (2005). "Man spürt eine neue soziale Energie" (Interview mit Pater Armando Janssens), en: *ila* 287, Bonn.
- Ellner, Steve / Hellinger, Daniel [eds.]. (2003). *Venezuelan Politics in the Chavez Era. Class, Polarization & Conflict*, Boulder / USA.
- Ellner, Steve / Salas, Miguel Tinker. (2005). "Introduction: The Venezuelan Exceptionalism Thesis: Separating Myth from Reality", en: *Latin American Perspectives* XXX, 32,2, Riverside / USA.
- Fox, Michael. (2007). "Venezuela's Co-op Boom", en: <http://www.venezuelana.lysis.com/analysis/2393>, 5.12. 2007.
- Harnecker, Marta. (2003). *Militares junto al pueblo*. Caracas.
- Lander, Edgardo. (2005). "Venezuelan Social Conflict in a Global Context", en: *Latin American Perspectives* XXX, 32, 2, Riverside / USA.
- Lander, Edgardo. (2006). "Creación del partido único, ¿aborto del debate sobre el Socialismo del siglo XXI?", en: <http://www.aporrea.org/ideologia/a28743.html>, 5.12. 2007.
- Lander, Edgardo. (2010). "¿Quién ganó las elecciones parlamentarias en Venezuela? ¿Estamos ante la última oportunidad de debatir sobre el rumbo del proceso de cambio?", en: <http://www.rosalux.org.ec/component/content/article/154-quien-gano-las-elecciones-parlamentarias-en-venezuela>, 21.10.2010
- Lemoine, Maurice. (2003a). "A coup countered", en: Wilpert 2003.
- Lemoine, Maurice. (2003b). "Coups d'Etats without Borders", en: Wilpert 2003.
- Lemoine, Maurice. (2003c). "Venezuela's Press Power", en: Wilpert 2003.
- Melcher, Dorothea. (2005). "Petroleumrepublik Venezuela", en: Sevilla/Boekh 2005.
- Mommer, Bernard. (2003). "Subversive Oil", en: Ellner/Hellinger 2003.
- Ramírez Voltaire, Simón / Müller, Markus-Michael. (2004). "Eine Einladung zum Mitmachen. Warum die Rede vom ‚Populismus‘ mehr verschleiert als sie klärt", en: *iz3w* 280, Freiburg.
- Rey, Juan Carlos. (1991). "La Democracia Venezolana y la Crisis del Sistema Populista de Conciliación", en: *Revista de Estudios Políticos* 74, Madrid.

- Rossanda, Rossana. (1975). *Über die Dialektik von Kontinuität und Bruch*, Frankfurt/Main.
- Sevilla, Rafael / Boekh, Andreas ([Hg.]. (2005). *Venezuela - Die Bolivarische Republik*, Bad Honnef.
- Wilpert, Gregory [ed.]. (2003). *Coup Against Chavez in Venezuela*, Caracas.
- Wilpert, Gregory. (2007). *Changing Venezuela by Taking Power. The History and Policies of the Chavez Presidency*, London.
- Zelik, Raúl. (2003). "Zur politischen Situation in Venezuela" (Interview mit Roland Denis), en: http://www.links-netz.de/K_texte/K_zelik_venezuela.html, 1.2. 2006.
- Zelik, Raúl. / Bitter, Sabine / Weber, Helmut. (2004). *Made in Venezuela. Notizen zum bolivarianischen Prozess'*, Berlin.
- Zelik, Raúl. (2005). "Venezuela - Notizen zur bolivarianischen Revolution'", (Radio-Feature), en: <http://www.raulzelik.net/techtarchiv/venezuela/wdr-feature.rtf>
- Zelik, Raúl. (2006). "Venezuelas ‚bolivarianischer Prozess‘. Mit Gilles Deleuze in Caracas", en: *Prokla 142 - Soziale Kämpfe in Lateinamerika*, Münster.